



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0226-TRA-PI

Solicitud de renovación de marca (POWEREDGE) (9)

DELL INC.: Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 90534)

Marcas y otros Signos

VOTO 0807-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas del seis de octubre del dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-299-846, apoderado especial de la casa denominada Dell Inc. De One Dell Way, Round Rock Texas 78682 USA, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas treinta y cuatro minutos veintidós segundos del treinta y uno de agosto del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 11:29:29 horas del 13 de marzo del 2014, el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en la condición indicada, solicitó la renovación de la marca de fábrica y comercio ***POWEREDGE***, en clase 9 de la clasificación internacional NIZA, para distinguir y proteger “*Computadoras, periféricos de computadora y partes o componentes para los mismos*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas treinta y cuatro minutos veintidós segundos del treinta y uno de agosto del 2015, indicó en



lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: Con base en lo expuesto y la normativa citada, se resuelve: I) Levantar el suspenso del expediente número 2-90534 referente al trámite de renovación solicitado por DEL INC., ...; II) Se ordena el archivo de la solicitud”***

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:49:38 horas del 24 de setiembre del 2015, el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista con el carácter de No Probados el siguiente Hecho de relevancia para la resolución de este asunto: Que la sociedad DELL INC. cancelara en tiempo el impuesto a las personas jurídicas, toda vez que no hay prueba idónea en el expediente que acredite tal circunstancia.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó que la sociedad DELL INC. con cédula jurídica 3-012-374817, se encuentra morosa en el pago del impuesto a las personas jurídicas, por lo que ordena el archivo del expediente.



Por su parte, el recurrente indica en su apelación que la compañía DELL INC. se encuentra en un proceso de conversión por lo que el pago de los impuestos no está definido aún. Solicitando poner nuevamente en suspenso ese movimiento hasta tanto se resuelva este asunto con el fin de evitar un serio perjuicio a su representada. Posterior a ello, en sus agravios aporta prueba de que la sociedad se encuentra al día en los impuestos a las sociedades.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Mediante la Ley 9024, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, indica en su artículo primero la creación de *“un impuesto sobre las sociedades mercantiles, así como a toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas o que en adelante se inscriban en el Registro Nacional”*; todas las sociedades mercantiles: Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedad en Comandita, Sociedades Colectivas, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, así como toda sucursal de Sociedad Extranjera o su Representante, tienen la obligación de pagar el impuesto a las personas jurídicas. Estableciendo como hecho generador el primero de enero de cada año para aquellas sociedades que ya se encuentran inscritas, y para las que se inscriban en el futuro, el hecho generador será la fecha de presentación ante el Registro del documento en que se solicite su inscripción, (artículo 2 de la Ley 9024).

Aunado a lo anterior, en el artículo 5 de la relacionada ley, se establecen las sanciones para el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en ella, dentro de éstas, la imposibilidad de inscribir, en incluso la cancelación del asiento de presentación, a los documentos de los contribuyentes de este impuesto que se encuentren morosos.

En este mismo sentido, en aplicación del artículo 9 de la ley de citas, la Junta Administrativa del Registro Nacional aprobó el *“Reglamento para la aplicación registral de la Ley al impuesto de las Personas Jurídicas”*, (publicado en La Gaceta No. 87 del 7 de mayo de 2012), en el que se regula la aplicación registral de la norma bajo estudio, estableciendo que:



“Artículo 10.- Sanciones. El Registro Nacional no emitirá certificaciones de personería jurídica ni inscribirá ningún documento referente a los contribuyentes del impuesto que no estén al día en su pago, y procederá a cancelar el asiento de presentación de los documentos correspondientes a personas jurídicas morosas o a decretar el abandono de la solicitud, según corresponda.

Se entenderá que la prohibición para la emisión de la certificación de personería jurídica y de la inscripción comprende todos aquellos documentos o solicitudes presentados o en trámite ante los diversos registros que conforman el Registro Nacional, relacionados con los contribuyentes obligados al pago del tributo que se encuentren morosos al momento de la emisión o registración correspondiente...”

En contra de la relacionada Ley y de su Reglamento, fueron interpuestas una gran cantidad de acciones de inconstitucionalidad, la mayoría de las cuales fueron rechazadas de plano por diversos motivos. Sin embargo, mediante resolución dictada a las 14:38 horas del 15 de febrero de 2013, la Sala Constitucional decidió dar curso a la ***Acción de Inconstitucionalidad No. 12-016277-0007-CO*** promovida por la empresa Edificio Chirripó de San Pablo, S. A. en contra de la citada Ley y su Reglamento. Señalando la Sala que dicha resolución “... *sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera inmediatamente.*” Asimismo, se agrega en la indicada resolución que, de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: “*esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas*”.



De este modo, en aplicación de lo ordenado por la Sala Constitucional en la resolución de las 14:38 horas del 15 de febrero de 2013, en que decidió dar curso a la **Acción de Inconstitucionalidad No. 12-016277-0007-CO**, se procedió únicamente a suspender el dictado de la resolución final, en razón de que la admisión de ese recurso no suspendió la vigencia de la norma impugnada. Siendo que, en virtud de ello y de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 9024, los diferentes Registros que conforman el Registro Nacional, procedieron a cancelar el asiento de presentación a los documentos que se encontraban en ese supuesto.

No obstante, la Sala Constitucional aclara los alcances de esta resolución en el **Voto No. 2013-4613** de las 14:30 horas del **10 de abril de 2013**, manifestando que en los procedimientos en que actúen sociedades que no hayan cancelado el impuesto, no solo debe suspenderse el dictado de la resolución final sino que *debe suspenderse también la cancelación de presentación de los documentos* relativos a dichas entidades, indicando:

“... II.- Sobre la gestión del accionante. El gestionante solicita adición y aclaración de la resolución dictada a las 14:38 horas del 15 de febrero del 2013. [...] Si bien la Ley N° 9024 está impugnada en su totalidad y en relación con algunos artículos específicos, lo cierto es que de conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que este Tribunal puede suspender es el dictado de la resolución final en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la o las normas impugnadas; no procede, porque la ley no lo autoriza así, la suspensión general de la aplicación de la norma. [...] En consecuencia, es claro que la aplicación de dicha norma no se puede suspender de manera general, sino sólo en aquellos casos en los que se discuta su aplicación y deba dictarse resolución final o sentencia. En virtud de lo anterior, no considera la Sala que la resolución de curso deba ser adicionada o aclarada. Ahora bien, el Tribunal aprecia que uno de los supuestos sancionatorios indicados por el accionante, -la cancelación de la



presentación de un documento al Registro por estar involucrada una persona jurídica que está morosa-, tal cancelación tiene efectos inmediatos que no pueden ser pospuestos, pues cancelada la presentación, la prioridad del asiento que ocupó ese documento no se puede recuperar, ya que el sistema lo saca de la “corriente registral”, con lo cual se afecta, de manera inmediata, la “publicidad noticia” que el Registro suministra. En este sentido y con el objeto de evitar daños tanto a la parte interesada como a terceros, y en procura de resguardar la veracidad de la publicidad registral, se aclara que en relación con esa sanción, la cancelación de la presentación del documento deberá suspenderse. En consecuencia en los casos de aplicación de las normas cuestionadas el Registro no deberá cancelar la presentación de los documentos, sino suspender los trámites de inscripción, los que quedarán sujetos a lo que en definitiva se diga en la acción...”

Acatando este criterio, el Registro de Personas Jurídicas procedió a dictar la **Circular Registral D.R.P.J. 002-2013** del 19 de abril de 2013, en donde instruyó a sus funcionarios indicándoles que, a partir del **18 de abril de 2013**, se debía suspender el efecto de la sanción establecida en el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley impugnada, en razón de lo cual *no debe cancelarse el asiento de presentación de documentos relacionados con contribuyentes morosos con este tributo, en cuyo caso debe suspenderse el trámite de inscripción, consignando el defecto de estilo.*

En resumen, la sanción de cancelación del asiento de presentación de los documentos relacionados con entidades morosas, o la declaratoria de abandono de la solicitud, se aplicó desde la entrada en vigencia de la Ley No. 9024 y hasta el 18 de abril de 2013, fecha establecida en la Circular Registral **D.R.P.J. 002-2013**, luego de la cual únicamente se suspendió el trámite de inscripción de dichos documentos, así como el dictado de la resolución final del procedimiento, en espera del pronunciamiento de la Sala Constitucional con relación a la inconstitucionalidad o no de la Ley y el Reglamento de citas, siendo que en algunos de ellos también se había cancelado el asiento de presentación y/o declarado el abandono de la solicitud.



En virtud de lo anterior, tal como sucedió en el caso bajo estudio, se procedió a suspender el trámite de solicitudes de inscripción de signos marcarios, en espera del pronunciamiento de la Sala Constitucional con relación a la inconstitucionalidad o no de la Ley y el Reglamento de citas, siendo que en algunos de ellos también se había cancelado el asiento de presentación y/o declarado el abandono de la solicitud.

La **Acción de Inconstitucionalidad No. 12-016277-0007-CO** promovida por Edificio Chirripó de San Pablo, S. A., fue resuelta mediante el **Voto No. 2015-001241** dictado a las 11:31 horas del **28 de enero de 2015**, en el que fueron anulados los artículos 1, 3 y 5 de la Ley No. 9024, dimensionando la Sala Constitucional los efectos de dicha declaratoria a partir del mes de enero del año 2016:

“IX.- CONCLUSIÓN. [...] En cuanto al fondo, la mayoría declara parcialmente con lugar la acción planteada y, en consecuencia, se anulan los artículos 1, 3 y 5 de la Ley No. 9024, Impuesto a las Personas Jurídicas, por la infracción al principio de publicidad –básico en un Estado Constitucional de Derecho– cometida por la Asamblea Legislativa durante la tramitación del proyecto de ley, ya que, se publicó un proyecto y luego, a través de uno sustitutivo que nunca fue publicado, se variaron cuestiones esenciales del impuesto, relativas a los sujetos pasivos (obligados), tarifa y sanciones no previstas originalmente. [...]

X.- DIMENSIONAMIENTO EN EL TIEMPO DE LOS EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD. [...] En materia tributaria, resulta de primordial relevancia el dimensionamiento en el tiempo de un fallo estimatorio de inconstitucionalidad, habida cuenta, que su efecto retroactivo podría generar graves dislocaciones tributarias o financieras, por tratarse de ingresos percibidos por la Hacienda Pública y, en la mayoría de los casos, presupuestados y ejecutados en presupuestos públicos sucesivos. Por lo anterior, se impone



dimensionar o graduar en el tiempo la declaratoria de inconstitucionalidad, de manera que la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá un efecto prospectivo que se iniciará a partir del período fiscal 2016. De modo, que todos los contribuyentes deben pagar el monto correspondiente al período fiscal 2015 y, obviamente, los anteriores si se encuentran morosos, so pena de verse sometidos a las multas, intereses y demás sanciones previstas en la ley que ahora se declara inconstitucional...” (Voto No. 2015-001241)

En el mismo sentido, fue resuelta por la Sala Constitucional la solicitud de adición y aclaración, presentada en contra del Voto No. 2015-01241, mediante el **Voto No. 2015-12009** de las 9:05 horas del 07 de agosto de 2015, manifestando:

“...VII.- SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ALCANCES DE LAS SANCIONES Y LA APLICACIÓN DE LA LEY. Tanto las autoridades del Registro Nacional y la Ministra de Justicia y Paz, como el accionante, solicitan la aclaración de la sentencia respecto a “los efectos registrales de la inconstitucionalidad y el mejor entendimiento de los efectos de la sentencia”. [...] Consultan sobre cuál debiera ser su proceder respecto a la aplicación de las sanciones, tales como, la imposibilidad de emitir certificaciones de personería jurídica, la inscripción de documentos, la creación de una base de datos con las sociedades morosas, la responsabilidad solidaria de los representantes legales de las sociedades, la disolución de las sociedades morosas, etc. Sobre este punto, debe señalarse que la competencia que la Sala ejerció al resolver la acción tiene su origen en la potestad que le otorga la Constitución y la Ley de la Jurisdicción Constitucional y, en ese sentido, tal y como se ha señalado, el incumplimiento de requisitos formales en razón del estrecho alcance jurídico del asunto base, hizo que la mayoría de los artículos de la ley no pudieran ser conocidos. Ante tal situación, serán los diferentes operadores jurídicos a quienes corresponderá disponer la manera en que el nuevo marco jurídico de nivel legal debe aplicarse a las distintas



*situaciones de hecho que se presenten, pues tal labor evidentemente excede la labor de la Sala. Evidentemente, no le corresponde a este Tribunal asesorar a las autoridades recurridas a efecto de determinar cómo proceder respecto al cobro de los impuestos que sí se debieron cancelar (períodos fiscales anteriores), máxime que esta Sala sí indicó que **“todos los contribuyentes deben pagar el monto correspondiente al período fiscal 2015 y, obviamente, los anteriores si se encuentran morosos, so pena de verse sometidos a las multas, intereses y demás sanciones previstas en la ley que ahora se declara inconstitucional”**, con lo cual, resulta claro que las sanciones o consecuencias por el impago se mantienen vigentes hasta que se cancele lo adeudado por períodos fiscales vencidos que sí debieron cancelarse...” (Voto No. 2015-12009)*

De este modo, tanto el impuesto creado como las sanciones establecidas en dicha ley, se mantienen vigentes desde su promulgación y hasta diciembre de 2015 y por ello las personas jurídicas que son sujeto de este tributo deben honrarlo respecto de todos los períodos anteriores, dado lo cual, las sanciones o consecuencias por el no pago se mantienen vigentes hasta que se cancele lo adeudado por períodos fiscales vencidos que sí debieron cancelarse, tal como indicó la Sala Constitucional, toda vez que la anulación de los artículos 1, 3 y 5 fue dimensionada para que surta efectos a partir de enero de 2016.

Analizado el presente caso, el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol en fecha 13 de marzo del 2014, solicitó la renovación de la marca de fábrica y comercio **POWEREDGE**, inscrita bajo el registro 147657, a favor de la empresa DELL INC., siendo que al momento de realizar tal solicitud, dicha sociedad se encontraba morosa del impuesto a las personas jurídicas (v.f. 6, 8 Y 12). Dicha solicitud se rechaza en su totalidad, puesto que de igual forma, con independencia del proceso de conversión, debió de pagar el monto establecido; dicho monto no varía, solo se verifica si dicha entidad se encuentra activa o no activa, de forma sencilla mediante la página de información de cobro de impuesto a persona jurídica (<http://www.registronacional.go.cr/Cobro%20Impuesto%20PJ.htm>), indicando únicamente el



número de cédula jurídica de la sociedad a la que desea cancelar.

El interesado no aportó en primera instancia el pago de los cánones respectivos que exige la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas y por ende la penalidad y efectos impuestos por la misma en la corriente marcaría, es por ello que el Registro de la Propiedad Industrial no solo levantan el suspenso del expediente referente al trámite de renovación sino que ordena el archivo del mismo, conforme lo establece la Ley No. 9024.

Aunque, a folio 25 del legajo de apelación, consta que la sociedad está al día, por lo que se presume que el rubro fue cancelado, lo cierto es que al momento de la resolución final se demostró que la sociedad estuvo morosa al momento de tramitar la renovación por lo que no queda más que confirmar la resolución final de la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

De este modo, la solicitud bajo estudio fue presentada dentro del período en que se mantuvo vigente la sanción establecida en el artículo 5 de la Ley 9024, sea que, el Registro de la Propiedad Industrial procedió al correcto archivo de la causa en que se solicitaba la renovación de la marca POWEREDGE, dado lo cual esa sanción es ejecutada de acuerdo con la normativa vigente en ese momento, y por ello lo procedente es confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución de las quince horas treinta y cuatro minutos veintidós segundos del treinta y uno de agosto del 2015, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, sobre el trámite de renovación de la marca de fábrica y comercio POWEREDGE en clase 9 internacional.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara ***sin lugar*** el recurso de apelación presentado por el licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, apoderado especial de ***Dell Inc.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas treinta y cuatro minutos veintidós segundos del treinta y uno de agosto del 2015, la cual ***se confirma***, denegando la renovación de la marca de fábrica y comercio POWEREDGE en clase 9 internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. ***NOTIFÍQUESE.***

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez



MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55